

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO DE MADRID

Reunido con carácter ordinario el Consejo Regional de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, el día 25 de abril de 2018, este Consejo quiere trasladar al conjunto de la ciudadanía madrileña, y de forma específica al conjunto de la comunidad universitaria, su firme compromiso en la defensa del modelo de Universidad Pública.

La actitud de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes Cuencas, que se ha dedicado a defender a ultranza sus intereses personales y políticos está cuestionando de manera injustificada y temeraria la Universidad Pública en cuanto modelo democrático de acceso al conocimiento.

CCOO exige que, de manera clara e incuestionable, se esclarezcan los procedimientos seguidos por Cristina Cifuentes Cuencas y la Universidad Rey Juan Carlos para la obtención del título de Máster en “Derecho Público Autonómico” por esta universidad. Es necesario determinar si el máster se realizó o no. En este sentido, CCOO:

- Reclama la adopción de las medidas legales y reglamentarias que procedan contra quienes se demuestre que han realizado actos fraudulentos y que se asuman las responsabilidades institucionales y políticas que puedan corresponder.
- Condena enérgicamente cualquier actitud de atribución personal de títulos universitarios no obtenidos y/o de la consiguiente supuesta usurpación de los mismos y de las atribuciones, que en su caso confieran.
- Y reitera su rechazo a cualquier actuación al margen de los cauces legales y defiende la Universidad Pública y los procedimientos que esta utiliza para garantizar las funciones que le atribuye la Ley.

La presente situación no puede ser utilizada para cuestionar el funcionamiento y la realidad del sistema público universitario. No podemos aceptar esta especie de cuestionamiento general del sistema para tapar las vergüenzas de aquellos que falsean sus currículos menospreciando el esfuerzo y el trabajo que supone la obtención de una titulación universitaria. No se puede poner en duda el trabajo honesto que día a día se desarrolla en las universidades públicas.

La sociedad actual no puede entenderse sin el papel que en ella juega el sistema universitario español, no sólo respecto a la formación de su alumnado, que es y será el sector profesional con mayor capacitación, sino también en relación a la investigación, la transferencia del conocimiento y el desarrollo de un pensamiento crítico. Las universidades públicas garantizan la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos sea cual sea su origen social y económico y apuestan por una docencia e investigación de calidad y por la formación de una ciudadanía crítica, lo que redundará necesariamente en el progreso del conjunto de la sociedad.

Todas las universidades españolas cuentan con sistemas reglados que garantizan la transparencia, permiten trazar una línea de tiempo en las acciones y evitan los actos diferenciados en procesos administrativos, con el fin de disuadir los comportamientos inapropiados e irregulares. La necesidad de mejora y reforma permanente de dichos procedimientos, de los objetivos que se persiguen con su aplicación y de los modelos de actuación es consustancial a las propias universidades. Y si bien esta necesidad de reforma y mejora parece más necesaria que nunca en la Universidad Rey Juan Carlos, esta situación no puede ser utilizada para cuestionar la dedicación, profesionalidad y vocación de servicio público del personal de esta y del resto de universidades, así como el trabajo, esfuerzo y sacrificio del alumnado de las mismas y de sus familias.

CCOO condena públicamente todas aquellas actuaciones que sean contrarias a la legislación vigente y a los principios y valores que guían las actuaciones de las universidades públicas y que vulneren la profesionalidad y honorabilidad de sus trabajadores y trabajadoras.

Finalmente, CCOO igualmente reclama a los responsables políticos que asuman de una vez por todas su responsabilidad y pongan punto final de inmediato a esta sangría institucional que la ciudadanía madrileña no merece. El ejercicio de un cargo público no sólo se gana en unas elecciones, se justifica y refrenda en las actuaciones que se adoptan cada día y, en estos momentos, la Presidenta de la Comunidad de Madrid ni justifica ni merece, con sus actitudes y actuaciones, la continuidad en su cargo. La ciudadanía de la Comunidad de Madrid no se merece una presidenta que lleva un mes dando informaciones contradictorias y que, en una huida hacia adelante, no duda en denigrar a las instituciones de las que ella es responsable.